

La consulta somete a informe de Esta Agencia Española de Protección de Datos Proyecto de Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de inversión para la modernización e innovación de las pymes comerciales de la Comunidad de Madrid.

Analizado el contenido del proyecto y en relación con los documentos de recogida de datos incluidos en los Anexos II, III y IV, en todos ellos aparece incluida la cláusula relativa al derecho de información que regula el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, considerando que todas ellas cumplen con lo dispuesto en el citado precepto.

Asimismo, el órgano convocante ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, al crear el correspondiente fichero de datos de carácter personal.

De esta forma, figura inscrito en el Registro General de Protección de Datos de Carácter Personal de esta Agencia el fichero “AECCO” cuya finalidad declarada es *“CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCION PRESENTADAS”*.

Siguiendo con el análisis de la “Solicitud”, ésta recoge en su Anexo I la posibilidad de que el solicitante de esta ayuda autorice a la Comunidad de Madrid para que ésta obtenga diversa documentación de manera telemática. A estos efectos, el solicitante deberá señalar expresamente que autoriza dicha consulta.

De esta forma, se da cumplimiento al artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que establece que los ciudadanos tienen derecho “A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre



que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.”

En este sentido, en el Anexo I se recoge la posibilidad de que el solicitante de esta subvención autorice a la Comunidad de Madrid para que ésta obtenga de forma directa diversa documentación de manera telemática. A estos efectos, el solicitante de la subvención deberá señalar expresamente que autoriza dicha consulta.

Así, para prestar este consentimiento para la consulta de documentación que ya obra en poder de la Administración, el Anexo I contiene una leyenda informativa la cual se considera suficiente para que el ciudadano pueda prestar el citado consentimiento.

Por último, tal y como señala el artículo 3 apartado primero del Proyecto de Orden que se somete a informe, “Podrán ser beneficiarios del régimen de ayudas contempladas en esta Orden las pequeñas y medianas empresas y los empresarios individuales...”. Vista la referida circunstancia, conviene señalar que, en lo relativo a la recogida de datos de personas jurídicas y empresarios autónomos, cabe indicar que, con carácter general, los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999 extienden su protección a los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere al tratamiento de sus datos de carácter personal, siendo definidos éstos en el artículo 3.a) de dicha Ley como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

Debe así señalarse que, como ésta Agencia ha venido reiterando en sus informes, la protección conferida por la Ley Orgánica 15/1999 no es aplicable a las personas jurídicas. Esta interpretación se plasma expresamente en el Reglamento de desarrollo de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que en su artículo 2.2 establece que *“Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas,(...)”*.

Por consiguiente, solamente estará sujeta a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999 el tratamiento y comunicación de datos relativos a personas físicas.

En lo que se refiere a los empresarios individuales, el artículo 2.3 del citado Reglamento dispone que *“Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.”*

A tal efecto, deberá tenerse en cuenta el criterio sustentado por esta Agencia en relación con lo establecido en el artículo 2.3 del Reglamento de desarrollo y contenido en el informe de 18 de febrero de 2008, reiterado en otros posteriores. El apartado II del citado informe señalaba lo siguiente:

*“A la vista de lo que se ha venido indicando cabe considerar que los datos referidos a los empresarios individuales y que aparecen exclusivamente ligados a su actividad comercial o mercantil, o que identifican, aún con su nombre y apellidos, un determinado establecimiento o la marca de un determinado producto o servicio, como consecuencia de la existencia de una libre decisión empresarial adoptada en este sentido, no se encuentran sometidos a la protección conferida por la Ley Orgánica 15/1999. Este es el criterio recogido por el artículo 2.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.*

*Al propio tiempo, el tratamiento ha de llevarse a cabo en el ámbito empresarial. Quiere ello decir que a los efectos del tratamiento de los datos, la finalidad perseguida por quien trata el dato es la de recabar y mantener información sobre la empresa y no sobre el comerciante que la ha constituido.*

*Así, el tratamiento de los datos del empresario individual, con las limitaciones que se han venido señalando, para mantener una relación comercial con el mismo, podría encontrarse amparado por el artículo 2.3 del Reglamento, en conexión con las normas de la Ley Orgánica 15/1999 que se han venido indicando.*

*Sin embargo, no podrá considerarse amparado por el precepto, y en consecuencia excluido de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, el tratamiento de los datos del comerciante llevado a cabo no con la finalidad de mantener una relación empresarial con el establecimiento u organización que*



*el mismo hubiera creado, sino para conocer la información del propio sujeto organizado en forma de empresa, siendo el destinatario del tratamiento no la empresa sino el propio empresario en tanto, por ejemplo, que consumidor individual.*

*En consecuencia, de lo que ha venido indicándose cabrá extraer dos conclusiones determinantes del alcance de lo dispuesto en el artículo 2.3 del Reglamento:*

- *Cabrá considerar que la legislación de protección de datos no es aplicable en los supuestos en los que los datos del comerciante sometidos a tratamiento hacen referencia únicamente al mismo en su condición de comerciante, industrial o naviero; es decir, a su actividad empresarial.*
- *Al propio tiempo, el uso de los datos deberá quedar limitado a las actividades empresariales; es decir, el sujeto respecto del que pretende llevarse a cabo el tratamiento es la empresa constituida por el comerciante industrial o naviero y no el empresario mismo que la hubiese constituido. Si la utilización de dichos datos se produjera en relación con un ámbito distinto quedaría plenamente sometida a las disposiciones de la Ley Orgánica.”*

A su vez, el informe de 22 de marzo de 2012 estudia la problemática de los ficheros contables de las Entidades Locales, indicando que “es preciso tener en cuenta que la Audiencia Nacional ha venido fijando un criterio diferenciador que resulta sumamente relevante en relación con la aplicación de este precepto, y que diferencia a los empresarios individuales de aquellos profesionales que no organizan su actividad en forma de empresa. Así, la sentencia de 21 de noviembre de 2002, referida aún a un supuesto en que resultaba aplicable la Ley Orgánica 5/1992 considera que procede la imposición de la sanción por la publicación de datos identificativos de arquitectos por cuanto “aquellos datos se refieren a profesionales que no ejercen su actividad bajo forma de empresa, no ostentando en consecuencia la condición de comerciante a la que se refieren los artículos primero y siguientes del [Código de Comercio](#)”, añadiendo que “puesto que la demandante afirma que el desarrollo de la actividad profesional en una economía de mercado, donde deben imperar los principios de publicidad y transparencia, exige o



*presupone la voluntaria aceptación por los afectados de la sustracción de sus datos del círculo protegido jurídicamente por la intimidad, conviene dejar precisado que los datos personales cuyo tratamiento y cesión in consentidos se imputan a la demandante en el caso que ahora nos ocupa no son datos relacionados con actos concretos de ejercicio de la actividad profesional, pues no aparecen puestos en relación con proyectos u obras determinadas ni con relaciones contractuales singularizadas sino que son, sencillamente, listados de datos personales correspondientes a profesionales de la Arquitectura”.*

*En el mismo sentido, la sentencia de 11 de febrero de 2004, referida al tratamiento del número telefónico profesional del denunciante, señala que “en el caso examinado el dato del afectado, aunque se refiera al lugar de ejercicio de su profesión, es un dato de una persona física con una actividad profesional, cuya protección cae en la órbita de la Ley Orgánica 15/1999 de tanta cita, como viene declarando esta Sala reiteradamente. En efecto, los datos personales son predicables de todos los ciudadanos, sin que pueda excluirse de dicha previsión los relativos a aquellos que realizan una actividad profesional, pues el ejercicio de esta actividad no puede ser equiparado a estos efectos a la de una empresa, como parece mantener la parte recurrente”.*

*Esta línea jurisprudencial se confirmó posteriormente por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2007, que desestima el recurso interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 2002, ya citada, en la que se señala que “para que el planteamiento de la parte resultara determinante de la exclusión sería preciso acreditar que la intervención en el mercado se produce como persona jurídica, haciendo uso de las distintas posibilidades que el ordenamiento establece al efecto (Sociedad, Empresa,...) y que los datos en cuestión vienen referidos a dicha persona jurídica, que no es el caso”.*

*De este modo, si los datos contenidos en la relación de contratistas se refieren a personas físicas o a profesionales no organizados en forma de empresa, como podría suceder en el caso de determinados profesionales autónomos con los que se hubiera firmado un contrato de consultoría y asistencia o de servicios, o si dichos datos exceden de los estrictamente relacionados con la condición de comerciante, industrial o naviero del empresario individual, nos encontraríamos ante datos de carácter personal sometidos al régimen de la Ley Orgánica 15/1999”.*



Por consiguiente, la Ley Orgánica 15/1999 no resultará de aplicación ni a las personas jurídicas ni a los empresarios individuales cuando los tratamientos se refieran a ellos en su condición de comerciante, industrial o naviero, siendo preciso en los restantes supuestos, sujetos a las previsiones de dicha norma, el consentimiento informado de los interesados para el almacenamiento y exposición de los datos, así como el cumplimiento de los demás principios y requisitos de la misma.